

Corrupción política, corrupción civil

Entre la trampa del día a día y los escándalos de los grandes partidos
hay una continuidad innegable

ESCUCHAR EL ARTÍCULO | 7 min. i



RAQUEL MARÍN



IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA

14 JUL 2026 - 05:30 CEST

    50 

Añadir EL PAÍS en Google

Después de algunos años de cierta tranquilidad, [los escándalos de corrupción vuelven a invadir el debate público](#). La política queda secuestrada por los informes policiales, las causas judiciales y la cobertura mediática de todo ello. No es la primera vez, como todos ustedes saben. Ha ocurrido con gobiernos del PSOE y del PP en el pasado. En cada ronda de corrupción, parece que el sistema se viene abajo, pero luego llegan las elecciones, hay alternancia y se recupera una cierta esperanza en dejar atrás estos problemas, si bien los cimientos del sistema se resienten y resultan cada vez más endebles. La corrupción destruye la confianza en las instituciones y en la política más en general. La desesperanza que produce la corrupción abre las puertas a líderes “salvadores” que prometen cortar por lo sano.

La ronda actual de escándalos es especialmente dolorosa porque Pedro Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura a cuenta de la corrupción que ahogaba al Partido Popular. Fue la sentencia de la Gürtel sobre la financiación irregular del PP lo que le animó a dar el paso. [El diputado del PSOE que intervino en el debate de la moción de censura](#), José Luis Ábalos, denunció sin miramientos la falta de reacción de Mariano Rajoy no solo ante la Gürtel, sino ante las decenas de causas que acumulaba el partido de la derecha en aquel momento. Es una triste ironía que Ábalos [haya sido condenado recientemente a 24 años de cárcel](#) por abusos de poder. Parece una maldición que persigue a la democracia española.

La lectura dominante de la corrupción es que se trata de un asunto circunscrito a los partidos políticos. Los partidos han “colonizado” buena parte del Estado (incluyendo muchas de sus agencias, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, empresas públicas, etc.) y eso da pie a abusos de todo tipo, a veces en beneficio personal del político de turno, a veces en beneficio del partido.

El problema, desde este punto de vista, está bien acotado. Las malas prácticas de los partidos no se extienden por el resto del sistema. Así, se recuerda con frecuencia que, en España, a diferencia de lo que sucede en otros países, la Administración del Estado funciona de manera imparcial. En nuestro país es muy difícil librarse de una multa u obtener una cita médica adelantada pagando un soborno al funcionario encargado de la gestión. Que eso no suceda revela, para muchos, que el problema se limita a la política, que la sociedad es virtuosa mientras que sus representantes actúan venalmente: los políticos traicionan a la gente.

Hay algo tranquilizador en esta manera de interpretar nuestro fenómeno de corrupción. Los ciudadanos estamos a salvo, son los que llegan a la política buscando el beneficio privado o de partido quienes abusan de las instituciones. De ahí que nos sintamos como espectadores cuando contemplamos cómo va cayendo un político tras otro (con cierta satisfacción íntima si son del bando contrario).

En realidad, creo que las cosas son un poco más complicadas. Aunque la corrupción como fenómeno se restrinja al ámbito público, la trampa está muy extendida en la sociedad. Y entre la trampa del día a día y la corrupción política hay una continuidad innegable. Me refiero al profesional que ofrece cobrar sin IVA, al vendedor de una vivienda que pide una parte en negro, al parado que trabaja en la economía sumergida, al trabajador que consigue una baja temporal gracias a un doctor amigo, a quien inventa una enfermedad de los hijos para tener más puntos en la búsqueda de colegio y un largo etcétera. Todos conocemos a “listos” a nuestro alrededor que saben aprovecharse para obtener una ganancia defraudando al Estado, con el consiguiente perjuicio a la sociedad. Un ejemplo perfecto fue lo sucedido durante la covid: se relajaron los controles en los contratos públicos y de inmediato [surgieron los espabilados de turno que se embolsaron comisiones escandalosas](#) vendiendo mascarillas a las administraciones públicas por precios desorbitados.

Hay un patrón común en esa forma de hacer trampas. La sociedad española no suele ver con malos ojos sacar provecho individual a costa del Estado. En cambio, no se tolera que un servidor público pueda beneficiarse gracias a un soborno pagado por un particular (surge aquí una especie de envidia igualitaria). Si se descubre que un policía cobra por eliminar multas de tráfico, caerá sobre él el oprobio. Nadie puede beneficiarse a costa de los otros, pero sí a costa del Estado. De ahí que, en contraste con el rechazo del

funcionario corrupto, no nos parezca tan reprochable [dejar de pagar el IVA si hay oportunidad para ello](#). En cambio, en el caso del funcionario, alguien se enriquece injustamente porque otro quiere burlar una obligación o sortear un obstáculo administrativo. Se admite engañar al Estado, pero se censura el enriquecimiento de un funcionario a cuenta de la ciudadanía.

Se da aquí una combinación de dos elementos claramente relacionados pero no idénticos. Por un lado, una desconfianza profunda hacia el Estado, que aparece como un ente abstracto que esquilma a los ciudadanos. Dada esa percepción, no nos plantea graves dilemas morales beneficiarnos a costa del Estado. Por otro, el particularismo endémico de las sociedades mediterráneas. Por decirlo con una fórmula breve, los “nuestros” están por encima del “nosotros”. Cuando hay una catástrofe, podemos mostrar solidaridad con los miembros del “nosotros”, pero eso es compatible con que pongamos a los “nuestros” por encima si hay algún beneficio en juego.

La baja legitimidad del Estado y el particularismo de los “nuestros” constituyen los dos elementos que explican la extraordinaria persistencia de las prácticas clientelares y de la laxitud en el cumplimiento de las reglas comunes. Esta es la matriz de la que, en última instancia, brota la corrupción política.

Es precisamente en el ámbito político donde el fenómeno alcanza su forma más patológica, pues todo lo anteriormente mencionado opera a una escala mucho mayor. Ya no es la pequeña cantidad que hurtamos del IVA, son millones de euros que circulan por los circuitos opacos del poder a través de nombramientos de miembros que son de los “nuestros”, contratos públicos a los “nuestros”, publicidad institucional para los “nuestros” y así sucesivamente. Es decir, para los míos y para el partido, todo; igual que para mi familia y mis amigos más cercanos en la vida diaria. Cuando se descubre la parcialidad y el ventajismo en el ejercicio del poder, la gente reacciona con indignación, sobre todo si son los rivales a quienes se les pilla con las manos en la masa, a pesar de que los políticos no estén sino haciendo a lo grande lo que se hace habitualmente en la sociedad civil. Visto así, es inevitable pensar que hay una cierta hipocresía social en el repudio universal a los políticos.

Nada de esto significa que el problema sea irresoluble. Pero tal vez no se arregle solamente endureciendo las regulaciones. Con cada ronda de

escándalos, se aprueban nuevas medidas que no dan nunca los frutos buscados. La dificultad última consiste en ampliar el radio de los “nuestros” al “nosotros” y entender que el Estado encarna ese “nosotros”. Esa es una tarea lenta que requiere cambios culturales profundos y una relegitimación de la cosa pública. En buena medida, la corrupción no hace sino alejarnos de ese objetivo.